

principio de que el Estado es uno e indivi-

te que el precepto legal impugnado como la demanda en modo alguno infringe el Constitución Nacional cuando permite a empleado público que fuera de las horas r servicios en su despacho, trabajo profes- o Dispensarios Municipales, toda vez vido no es pagado por el Estado sino por tidad con tesoro propio e independiente".

ra que el aparte b) del artículo 6º de la nstitucional, con excepción de la parte cios profesionales que se presten en Clis municipales que se mencionan en dicho

Fallo de 5 de Julio de 1965

ene Registro Judicial, ni en la G. O.  
I Rep. Jur. Nº 7, Julio, 1965, pág. 7)

ARTICULO 41  
ARTICULO 75  
ARTICULO 76

rrera Acosta, Representante legal de la ientarios de Líneas de Taxis pequeños, de- ucionalidad del ordinal segundo del ar- go de Trabajo sobre arrendamientos.

ecurrente señaló la violación del artículo ón Nacional por el fallo del Tribunal Su- l condenarlo a pagar preaviso, salario m- proporcionales y hasta horas extras a los alant con él —propietario de taxis peque- arrendamiento del carro mediante el pago ó \$/ 5.00 por el uso del carro desde las hasta las once de la noche.

acutación, la Corte consideró que no exis- artículo 41 de la Constitución, porque en su artículo 70 establece que 'serán nulas lgun a los contratantes, aunque se ex- de trabajo o en otro pacto cualquiera, ue impliquen renuncia, disminución, adul- de algún derecho reconocido a favor del iustifica las facultades otorgadas a la de Trabajo en el sentido de aprobar o

improbar los contratos en los cuales exista una relación obrero-patronal, con miras a proteger al obrero".

Al analizar la violación de los artículos 75 y 76 de la Constitución también señalados por el recurrente, la Corte dijo: "al contrario de lo que el recurrente sostiene, al esta- blecer esos artículos la jurisdicción del trabajo, que ante- riormente no existía, exigen y ordenan que las leyes que regulan las relaciones entre el capital y el trabajo, sin per- judicar a ninguna de las partes, le garanticen al trabajador las condiciones necesarias para una vida normal y al capital una compensación equitativa a su inversión. Cosa que no se establece en las pretensiones del recurrente".

Por esas razones —agrega la Corte— "siempre que es- tos contratos de arrendamiento o de cualquier forma no afecten los derechos del trabajador consagrados en el ar- tículo 70 de la Constitución, no son inconstitucionales, como también la Corte se reafirma en su posición respecto al con- tenido del artículo 8º de la misma excerta; disposición se- gún la cual 'mientras no conste lo contrario, se presume existe un contrato de trabajo entre quien presta un servicio o ejecuta una obra y la persona que recibe el beneficio del servicio o de la obra ejecutada".

DECISION: Declara que no es inconstitucional el ordinal 2º del artículo 595 del Código de Trabajo.

7/65 - Fallo de 19 de Julio de 1965

(No publicado en el R. J., ni en la G. O.

Publicado en el Rep. Jur. Nº 7, Julio, 1965, pág. 12)

ARTICULO 41  
ARTICULO 246

NOTA: Roque J. Gálvez solicita al Pleno de la Corte Supre- ma de Justicia la declaración de inconstitucionalidad de la frase: "remuneraciones de cualquier clase", consignada en el primer inciso del artículo 6º de la Ley 46 de 1952, "por la cual se fija la escala general de sueldos".

Antecedentes: Se demanda la inconstitucionalidad del primer inciso del artículo 6º de la Ley 46 de 1952, —por ser contrario al art. 246 de la Constitución— en la parte que dice "remuneraciones de cualquier clase" y que según la Ga- ceta Oficial Nº 11958 de 22 de diciembre de 1952 donde se publicó dicha ley, dice así:

"Ninguna persona podrá devengar dos o más sueldos, asignaciones o remuneraciones de cualquier clase pagadas con fondos del Estado, municipales o instituciones autónomas o semi-autónomas, a menos que se trate de los siguientes casos:

DOCTRINA: Al resolver sobre el fondo del asunto planteado, la Corte, de acuerdo con el concepto del Procurador General de la Nación, se expresó así:

"El demandante señala como violados por el inciso primero del artículo 6º de la Ley 46 de 1952 los artículos 41 y 246 de la Constitución Nacional. Con respecto al primero precisa decir enseguida que el Pleno no alcanza a comprender cómo resulta su infracción cuando él se limita a garantizar a toda persona la libertad de ejercer cualquier profesión u oficio, sujeto tal ejercicio a los "reglamentos que establezca la Ley en lo relativo a idoneidad, seguridad y salud pública", en tanto que el precepto legal impugnado, sin desconocer ni lesionar en forma alguna tal derecho, lo que contiene es, lisa y llanamente, una prohibición relativa a la acumulación de dos o más sueldos, asignaciones o remuneraciones de cualquier clase por una persona, pagados con fondos del Estado, municipales o de instituciones autónomas o semi-autónomas. Como puede apreciarse, se trata de algo totalmente distinto".

"En lo que dice ahora la violación del artículo 246 del Estatuto Fundamental, alegada por el demandante, precisa decir de una vez que ella surge de bulto. Y ello es así porque la simple confrontación del inciso tachado de inconstitucional con el referido artículo 246 de la Carta evidencia que mientras éste contiene para el empleado público la prohibición de percibir más de un sueldo pagado por la Nación, aquel inciso va mas lejos y hace extensiva la prohibición a "remuneraciones de cualquier clase". Ello, como se ve, coloca a la norma legal por encima de la constitucional, cuando debe ser todo lo contrario por razón de la jerarquía de las mismas. Así se explica, pues, por qué debe accederse a lo pedido en la demanda".

DECISION: Declara que la frase "remuneraciones de cualquier clase", consignada en el primer inciso del artículo 6º de la Ley 46 de 1952, es inconstitucional.

8/65 - Fallo de 6 de  
(No publicado en el Registro  
Publicado en el Rep. Jurídico N°

## ARTICULO ARTICULO

NOTA: Eduardo Morgan demandó del oficio N° 124-dav. de 6 de febrero de Hacienda y Tesoro.  
DOCTRINA: El demandante consigna de la Constitución se ha violado directa hecha al Organo Ejecutivo dentro de Hacienda sin someter la misma a la Corte para que fuera legalmente pretermitido las normas de la Ley con un acto cuya "validez" según el propio denunciante, lo propio instaurar una acción de ilegalidad ante la Corte Suprema de Justicia.

También advierte el demandante que el art. 70 de la Ley 46 de 1952 en lista por cinco días para que aleguen por escrito porque tal trámite por el artículo 167 de la Constitución de inconstitucionalidad, se le da lugar a que el Magistrado Sustancie una consulta al Pleno de la Corte—opina la Corte— "fué desatendida y esto es rigurosamente exacto, que la consulta de inconstitucionalidad, el Magistrado no tiene potestad para promover constitucional. En este caso no se dan los requisitos del ordinal 1º del artículo 167 constitucional, es decir, el Magistrado Sustancie no está encargado de impartir justicia en el Pleno de la Corte, que es la potestad constitucional que le atribuye la Constitución Nacional.

DECISION: Resuelve que no es viable la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el oficio de Febrero de 1964, del Señor Ministro de Hacienda y Tesoro.